

Jaime Caycedo*

Impacto regional del conflicto colombiano en América Latina

EL PLAN COLOMBIA, puesto en práctica durante las administraciones Pastrana-Clinton en 2000, y concebido como un plan contrainsurgente bajo la cobertura de un plan antinarcóticos, varió sus objetivos de primer plano para destacar el antiterrorismo como elemento central por dos razones principalmente: el cambio en el enfoque estratégico de Washington y el cambio interno en la orientación político-militar del régimen colombiano. Ambas variaciones están relacionadas; cada una de ellas responde a visiones convergentes, pero distintas. La primera sienta las bases del dominio mundial e instrumenta sus ayudantías regionales; la segunda mira hacia adentro, en la idea de resolver con manos ajenas y ayuda exterior los conflictos históricos sociopolíticos internos y la incapacidad de generar un liderazgo regional correspondiente a su potencialidad geopolítica estratégica. La interacción de estas conductas afecta negativamente a la región, a América Latina y el Caribe en su conjunto, en tanto conduce a la "internacionalización activa" del conflicto en el mismo momento y proceso en que se intenta montar una integración hemisférica, fundada en acuerdos bilaterales de libre comercio -y en su potencial sistematización en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)- como expresión de la hegemonía de Estados Unidos.

Tal afectación tiene alcances sociales muy profundos dada la honda crisis económica y sociopolítica en que se encuentra inserta la región andina. Las movilizaciones populares en Bolivia, que impusieron la dimisión del presidente Sánchez de Lozada y los resultados electorales del 25 y 26 de octubre en Colombia, que rechazaron el referendo de Uribe Vélez y proyectaron a corrientes independientes y progresistas a los gobiernos locales, muestran un grado creciente de las resistencias y un nuevo camino de búsqueda de alternativas de resolución de la crisis. No podemos abordar intentos explicativos sin tener en cuenta estas nuevas realidades.

Una manera de aproximarnos a una explicación tentativa de esta situación sería, en primer lugar, la de examinar someramente el cambio estratégico global en general y en su relación con Latinoamérica y el Caribe, y en particular el significado de la *guerra preventiva*, tal como se formula y practica hoy, a diferencia de la guerra preventiva de la época del equilibrio bipolar. Esta nueva visión debe analizarse en el contexto globalista actual como parte de la *guerra por el predominio mundial*, meta fundamental de la seguridad nacional de Estados Unidos bajo la orientación de Bush, que incluye el ALCA, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las pugnas por reactivar, de alguna forma, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

En segundo lugar trataremos el viraje hacia la solución militar radical del conflicto interno por parte del núcleo fundamental de la burguesía colombiana, en sus entronques con la economía, el ALCA y la *guerra por el predominio*. El conflicto colombiano, en el contexto de la guerra preventiva y como parte integrante de la guerra por el predominio, adquiere una incidencia regional particularmente grave. En realidad, la evolución de las posiciones de los estados latinoamericanos frente a Colombia tiene que ver de alguna manera con los dos elementos de la estrategia global. Eso no significa que se pierda el sentido del peso de lo interno, sobre todo de la lucha social y de sus consecuencias políticas en los países vecinos.

Una conclusión provisional nos dejará la pista de las tendencias que pueden marcar la evolución futura del conflicto colombiano, en particular aquella que apunta a la salida política negociada, con la neutralización del intervencionismo militar del Plan Colombia y con soluciones internas a los desequilibrios sociales y a la exclusión política.

Colombia en la estrategia global de Bush

La guerra preventiva de Bush es una guerra por el predominio mundial, no una guerra exclusivamente militar. El despliegue, el montaje y las acciones militares complementan el cuadro de la dominación económica y política. Encuadran, a escala general, el control social, la contención de las fuerzas sociales opositoras y/o antisistémicas y el remodelamiento institucional correspondiente a una subordinación permanente.

No es una guerra preventiva de aquellas que conocimos en las décadas de los '60 y '70. Entonces, en el marco del bipolarismo, las acciones preventivas bajo la modalidad de conflictos de baja intensidad (CBI) apuntaron a la contención anticomunista. Más concretamente para el caso colombiano, el Plan LASO (1960-1965, por las siglas en inglés de Latin America Strategic Operation) se inscribe en la "visión contrainsurgente 'desarrollista'", a decir de Alfredo Rangel. En lo militar intentaba el aniquilamiento de la guerrilla naciente a través de vastos operativos:

(...) para su erradicación en ciertos territorios cuyo control había perdido el Estado y se estaban convirtiendo en 'repúblicas independientes'. En lo político, el propósito era quitarle a la guerrilla sus apoyos entre la población, mediante campañas denominadas cívico-militares, de claro corte asistencialista y que ignoraban las razones estructurales profundas de la insurgencia (Rangel, 2001: 354-355).

Aun cuando autores como Rangel consideran la acción contrainsurgente como una elaboración interna, resultado de planteamientos de los mandos militares colombianos, son los factores externos de contención anticomunista de la estrategia estadounidense los que inspiraron a emprender este tipo de acción político-militar. El plan LASO implicaba un cambio en la concepción del tratamiento del "orden público", poniendo énfasis en la destrucción-dispersión de los núcleos organizados del campesinado que, tras las aparatosas operaciones militares efectuadas bajo la dictadura militar de Rojas Pinilla, en el interregno de la Junta Militar y el primer gobierno del Frente Nacional (1957-1958), tuvo un respiro con el repliegue del ejército de varias regiones agrarias.

El enfoque cívico-militar, lejos de representar solamente una alternativa militarista, jugó en lo político especialmente con la aprobación de una ley de reforma agraria y la iniciación de un proceso de organización, desde el Estado, de los sectores del campesinado que pudieron beneficiarse de dicha ley. Según las opiniones de varios de los dirigentes guerrilleros, el período más difícil y de mayor peligro de inestabilidad para la guerrilla fue el de incidencia de los proyectos del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (Incora), que coincidieron con la presencia y el despliegue insurgente (1966-1972). En tal sentido, el tipo de reforma agraria puesto en marcha, especialmente bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, pese a sus limitaciones y baja cobertura, tocó al movimiento guerrillero en desarrollo y lo afectó más eficazmente que la sola acción cívico-militar (Caycedo, 1998: 5). Es con la reversión relativa de la semirreforma agraria en 1973, y con la promulgación del Estatuto de Seguridad a finales de la década, que recobra fuerza la lucha guerrillera y adquiere notable influencia en los fenómenos políticos de los años '80.

Los procesos de diálogo y negociación que se inician a partir de 1982 con el gobierno Betancur (1982-1986) reflejan los cambios en el entorno latinoamericano influidos por el desarrollo de los conflictos centroamericanos y los esfuerzos por encontrar salidas negociadas. Las relaciones entre civiles y militares fueron muy tensas alrededor de aspectos como los despejes, los procedimientos de verificación del cese al fuego, los asaltos a campamentos en tregua, la guerra sucia contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano (PCC), etcétera. En esencia, la tendencia predominante hacia la solución política contrarrestó, en parte, un mayor despliegue militar. Pero esa alternativa recibió el influjo de los consejeros del Pentágono y del Comando Sur con procedimientos e iniciativas para encuadrar el manejo del CBI en escenarios de negociación previamente diseñados por ellos. La tendencia hacia la

solución política se mantiene hasta el viraje de 2002, tras la ruptura del proceso de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en El Caguán.

¿Qué razones explican este viraje en la orientación del régimen? El estancamiento y desgaste del proceso de diálogo sin mayores resultados; la ineficacia de las operaciones militares, bajo el pretexto de que los militares estaban maniatados por los compromisos con los derechos humanos y las investigaciones de la Procuraduría; la percepción de la clase dominante de la imposibilidad de lograr una negociación “a bajo costo” y de que el diálogo prolongado facilitaba la acumulación de fuerzas de la insurgencia.

En este cambio inciden el Plan Colombia, puesto en marcha en 2000, y las consecuencias de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. El nuevo matiz predominante en la doctrina estratégica de Estados Unidos se torna decisivo en el proceso del conflicto interno colombiano. En ello reside el cambio de énfasis en el Plan Colombia hacia la acción contrainsurgente bajo el rubro antiterrorista. El CBI es elevado al rango de elemento bandera de la política exterior del país bajo la forma de un programa de erradicación de cultivos de uso ilícito, en el marco de la lucha antinarcóticos, pero el nuevo énfasis desmantela la apariencia exclusivamente antinarcóticos y pone al descubierto la verdadera orientación de fondo.

Un nuevo cuadro de reajuste hegemónico

El cambio de énfasis revela un cambio estratégico:

La ascensión hegemónica de Estados Unidos, vivida como un proceso de reproducción del sistema, se desarrolla según un esquema recurrente de la prevalencia que asegura un cuadro político y de seguridad favorable a la expansión hegemónica. [...] La “modelación” con prevalencia del sistema mundial, a través del mantenimiento de una posición dominante en el seno del nuevo orden globalizado, implica una sumisión generalizada a la globalización por las normas y los regímenes (gobernabilidad, transparencia, reglas jurídicas, libre cambio, intervencionismo, etc.) pero también por medio de la guerra o la amenaza de guerra, o incluso la demostración disuasiva de una superioridad tecnológica e informacional (Bédar, 2003).

Si esta mirada tiene sentido, la nueva orientación de la política estadounidense cobija en un mismo proyecto una remodelación del mundo bajo su hegemonía, que comprende lo económico, lo jurídico y lo político-militar. Según Bédar está en desarrollo una nueva perspectiva geopolítica que promueve “espacios de aglomeración” regionales, como el ALCA, con la pretensión de garantizar en ellos la seguridad del sistema, contrarrestando las resistencias a los efectos de la globalización y/o aquellas asociadas a la criminalidad en redes, consideradas unas y otras como equiparables¹.

El tratamiento del conflicto colombiano, siguiendo la orientación hegemónica de Bush, afectaría así el espacio de aglomeración en su conjunto, no únicamente la puntualidad del fenómeno interno colombiano. Por eso la estrategia está prevista para dominar el conjunto de las resistencias y proyectar la prevalencia hegemónica. Asociada al esquema de la guerra preventiva permanente implica, con sus recursos y normas transnacionales jurídico-económicas, la imposición de un predominio tecnológico, político y comercial incuestionable.

La política interna y su efecto regional

El segundo aspecto en consideración se refiere al cambio en la percepción de los sectores gobernantes hacia las opciones de victoria militar sobre la guerrilla a cualquier costo. La elección de Álvaro Uribe como presidente representó un viraje de la política colombiana en dirección del escalamiento del conflicto interno, el compromiso con el Plan Colombia, el libre comercio y el ALCA y un liderazgo desde la derecha pro-imperialista en el perfil internacional del país.

Como lo ha recordado Álvaro Vásquez (Vásquez, 2003), la posición tradicional del *establishment* en Colombia ha sido la de una solución militar del conflicto. El rompimiento de los diálogos en febrero de 2002 desnudó una postura histórica de los gobiernos colombianos.

Tanto los esfuerzos militares como los de carácter político, inscritos ambos en la contrainsurgencia, buscaron la derrota del movimiento guerrillero y la negociación sólo con una insurgencia dominada. Lo extraño o nuevo fueron los intentos, desde el gobierno de Betancur, de reconocer a la guerrilla como un interlocutor político y aceptar la posibilidad de cambios sociales e institucionales como base de un eventual acuerdo de paz.

El viraje al que aludimos significa el convencimiento y la decisión de los gobernantes de poner fin, de manera tajante y definitiva, a la lucha armada guerrillera. El regreso a la vieja postura cuenta ahora con factores externos impulsores: el intervencionismo militar y la alianza estratégica implícitos en el Plan Colombia; la nueva doctrina de Washington; los cambios introducidos por la asistencia militar, armamentista y tecnológica en el cuadro general del enfrentamiento. La presencia directa de contratistas y mercenarios estadounidenses marca un hecho nuevo en el proceso actual. La ampliación de la guerra aérea que predomina sobre las acciones en tierra, el incremento de la ayuda para inteligencia militar en tiempo real, el despliegue de la política de "seguridad democrática" en términos de redes de informantes, cooperantes y soldados campesinos, que integran e institucionalizan parte de los aparatos paramilitares en la política oficial, muestran una modificación en la estrategia, un compromiso mayor y una exigencia creciente por resultados a las fuerzas militares del país.

La presencia casi permanente del comandante del Comando Sur en el desarrollo de las operaciones indica que la enorme influencia del complejo militar-industrial de Estados Unidos sobre la administración y el Pentágono lo acerca peligrosamente a una participación cada vez más directa en el conflicto armado colombiano y condiciona, de manera negativa, las opciones para regresar a la vía de una solución política negociada. El gobierno colombiano accedió a suscribir un acuerdo que exime de responsabilidad penal al personal militar estadounidense en el país, ante la justicia colombiana y ante la Corte Penal Internacional (CPI). La obsesión por la victoria militar contrainsurgente, como mentalidad predominante hoy en la burguesía colombiana, muestra dos consecuencias: la tendencia a renunciar a un proyecto propio de sociedad, nación y desarrollo; y la elección de una vía militar de inserción de su presencia política en el contexto de transnacionalización representado por el libre comercio, el ALCA y las relaciones hemisféricas (Vásquez, 2003: 708-711).

Como en el pasado, la burguesía colombiana retorna al pensamiento neocolonial de la ley de la gravitación hacia Estados Unidos como destino fatal de América Latina y el Caribe, es decir, a la versión contemporánea de la doctrina Monroe, revivida para el proyecto globalista. Esta posición representa una tendencia constante, con diversas variantes, de la política de Washington (Soppelsa, 2003: 179). Mucho más extraño y anómalo es que la asuma un gobierno latinoamericano, cuando la tendencia predominante en el continente es a una mayor autonomía. La guerra y su desenlace supedita todo proyecto de progreso, cambio y desarrollo para la burguesía colombiana, que hipoteca su autonomía en la intrincada maraña de los intereses de los monopolios transnacionales y del imperio. Es el intento de la derecha de darle salida a la crisis, pero es también la vía de darle la espalda a los procesos de lucha social antiglobalización y de cambio político democrático que tienen expresión en los gobiernos y procesos de Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia y en las perspectivas electorales de Uruguay.

El ALCA como "espacio de aglomeración" y de influencia territorial, y su núcleo primordial -los acuerdos bilaterales (y no la negociación colectiva)-, es la estrategia de Estados Unidos, asociada a una política que condiciona la remodelación de América Latina y el Caribe. El centro operativo del intervencionismo basado en la negociación-disuasión es la Organización de Estados Americanos (OEA), y su instrumento principal es la denominada Carta Democrática. En la espera -algo difícil de lograr- de un compromiso militar para la acción colectiva en el marco del TIAR (hoy demasiado cuestionado) o de otro mecanismo o acuerdo similar, la presión que surge del consenso de la Carta no logra aportar soluciones, en tanto tiene partido tomado en las disputas internas de los diferentes conflictos.

Las propuestas de mayor significado emanan hoy de lo que algunos empiezan a nombrar como el Plan Colombia II. En esencia se busca dar legitimidad a la opción de acciones colectivas, incluidas acciones militares, que no apuntan sólo al conflicto colombiano sino a la eventual intervención en el proceso venezolano y ¿por qué no? en otros casos que impliquen

“desviaciones” de la Carta Democrática, juzgadas peligrosas o inconvenientes (Caycedo, 2003b).

¿Una segunda parte del Plan Colombia?

Tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa han comenzado a hablar de un Plan Colombia II. No se conoce a la fecha (octubre de 2003) un texto específico que lo describa. Podemos, no obstante, inferir algunas deducciones en torno a los nuevos énfasis que destacan en la ayuda de Estados Unidos, aspectos de la *guerra por la prevalencia*, asociada a la *guerra preventiva*.

En primer lugar el Plan Colombia II contempla la consolidación de un área de despliegue estratégico en la confluencia de Andes, Caribe y Amazonia a partir del compromiso de otros gobiernos, si no en colectivo, sí uno por uno. En este sentido puede entenderse el reacomodo político del presidente Lucio Gutiérrez, en su “gravitación” hacia Washington y hacia Uribe Vélez. Un logro considerable de la estrategia es conseguir integrar, de manera más comprometida, a un Estado como Ecuador. Ya no es sólo la base de Manta, sino la franja de frontera del San Miguel-Putumayo, una de las regiones continentales más estratégicas, sometida actualmente a una intensa fumigación²; es la cooperación militar y policial, más discreta pero no menos comprometida; es la conducta del gobierno de Toledo en Perú, sobre todo a partir de la cumbre del Grupo de Río en Cusco y la propuesta que allí introdujeron Uribe y Lucio dirigida al secretario general de la ONU.

En segundo lugar presupone convertir a Colombia y Ecuador en un espacio operacional militar desestabilizador para Venezuela y/o eventualmente para la Amazonia brasileña. Se consolida el polígono de bases militares que circundan el área andina, foco de inestabilidad y conflicto, lo que incluye a Venezuela y su régimen político actual como “enemigo”. La nueva base militar de Caño Limón, en el departamento de Arauca y su complemento en la base aérea de Marandúa, en el departamento del Vichada, ambos en frontera con Venezuela, completan un eje transversal que comprende las bases de Manta (Pacífico ecuatoriano); Tresesquinas-Larandía (alta Amazonia colombiana); Cañolímón-Marandúa (Orinoquia colombiana); Aruba-Curaçao (Caribe holandés) como zona de control satelital, espionaje aéreo y operaciones militares. Otras bases estadounidenses en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe complementan este montaje. Las maniobras militares conjuntas, fundadas en la hipótesis de intervención colectiva en un país aquejado por guerra civil, son recurrentes desde 1999.

Venezuela ha señalado preocupación por la actividad paramilitar, con propósitos de desestabilización interna, agenciada desde Cúcuta y la frontera del Catatumbo.

A su vez los intentos del Comando Sur por implicar a Brasil y Paraguay con las rutas de la droga desde Colombia, a partir de los operativos sobre los ríos Vichada y Guainía-Río Negro, en límites con Brasil³, extienden hacia la denominada Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina) la secuencia justificatoria del despliegue militar⁴.

Podría decirse que esta función extendida del Plan, bajo la denominación de la Iniciativa Regional Andina (ATDEA), incluye, además del activo papel de Ecuador, a Panamá y a otros Estados en calidad de coadyuvantes. Organismos asesores como el International Crisis Group recomiendan activar todos los convenios militares y policiales entre Colombia y sus vecinos para contener a los grupos irregulares (International Crisis Group, 2003: i-iv).

En tercer lugar prosigue el armamentismo unilateral del ejército y la policía colombianos frente a los países vecinos. El traslado de la guerra a la selva, como lo anuncia Uribe, para “buscar a los bandidos en sus madrigueras”, refleja el aspecto operativo estratégico principal de la orientación de la guerra: la llamada Operación Decapitación, que intenta caer sorpresivamente sobre los estados mayores de las organizaciones guerrilleras, tras los denominados “blancos de alto valor”, para tratar de poner fin, de una manera rápida, a los centros neurálgicos de la insurgencia. Donald Rumsfeld ofreció cooperar en el entrenamiento de comandos especializados en “operaciones de selva”. Otros objetivos, que nada tienen que ver con la lucha antinarcóticos, buscan el desmantelamiento de grupos de milicias urbanas y de inteligencia técnica para prevenir ataques terroristas.

Unido a esto hay que tomar en cuenta la reactivación de la interdicción aérea (suspendida desde 2000 por el derribamiento de una avioneta con misioneros en Perú), la extensión en permanencia y cobertura del espionaje aéreo y satelital que entrega información en tiempo real a las tropas y la ayuda de más de cien millones de dólares para la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas, apropiada por el Congreso estadounidense por fuera de la Iniciativa Regional Andina.

Uribe ha insistido en la propuesta de “casco azul” de la ONU para prestar asistencia humanitaria y verificar el proceso de reinserción de los paramilitares. Una fuerza preventiva de la ONU también podría interponerse en las fronteras para contener el desplazamiento de guerrilleros y proteger a los países vecinos. El debate continúa pese al escepticismo de los gobiernos de la región y a su negativa de intervenir bajo cualquier forma en el conflicto colombiano, por temor de verse involucrados en contrainsurgencia o de exponerse a una intervención de Estados Unidos.

En cuarto lugar la política de fumigaciones se intensifica incluso en las fronteras, con dosis aún más concentradas y perjudiciales, haciendo caso omiso de las decisiones de los tribunales colombianos y de las recomendaciones de organismos medioambientales. La afectación a las poblaciones tiende a omitirse en la información y a minimizarse en los datos oficiales.

La consecuencia de lo anterior se observa en el hecho de que el gobierno colombiano modificó radicalmente la política de paz de los gobiernos anteriores. La política actual es de guerra y de victoria bélica. El diálogo sólo se admite si hay rendición. Los acuerdos humanitarios tendrían un efecto desmoralizante para las tropas, según el gobierno, que le ha dado prioridad a la cooperación con el personal norteamericano para rescatar a los tres rehenes de esa nacionalidad en poder de las FARC. El gobierno no hace ningún esfuerzo visible por progresar en los acuerdos humanitarios. Dificulta, en vez de facilitar, los ofrecimientos del grupo de países amigos, incluidos Brasil y Venezuela, como mediadores para los acercamientos. Está pendiente el proceso de diálogo entre el secretario general de la ONU y su representante personal con las FARC. Brasil ha ofrecido su territorio para dicho encuentro, aun cuando algunos analistas se muestran escépticos (Malamud, 2003: 5).

Todo avance hacia la solución política negociada en Colombia y una salida pacífica que neutralice el intervencionismo militar de Washington implica un cambio en la actual orientación del gobierno, de sus prioridades en lo interno y de su incondicionalidad frente a los compromisos con Estados Unidos. Sólo una presión muy grande, en lo interno y en lo externo, puede lograr este propósito.

Ahora bien, sostenemos que existen coincidencias fundamentales entre todos aquellos que ven venir los peligros que derivan de una situación tan compleja como la que involucra a Colombia y el conflicto interno colombiano. Su solución es cada vez menos un asunto puramente colombiano y se convierte en una necesidad de América Latina y el Caribe para vivir en paz, estabilidad, soberanía, y progresar en la solución de sus problemas sociales y culturales.

Conclusiones

El Plan Colombia es sin duda una herramienta de dominación que amenaza la estabilidad y la autonomía de América Latina y el Caribe. Se ha venido potenciando por la acción y la ayuda unilateral del gobierno de Estados Unidos. Esta ayuda se ha ampliado por fuera del plan para abarcar objetivos específicos de fachada como la protección de un oleoducto de la Shell-Occidental, cuando el verdadero objetivo es construir un complejo militar en la frontera de Colombia y Venezuela.

No es posible juzgar la incidencia del conflicto interno colombiano al margen del Plan Colombia, de la guerra preventiva permanente y de la guerra por la prevalencia hegemónica de Estados Unidos, en su intento por remodelar las relaciones hemisféricas en función de la tríada ALCA-Carta Democrática-Plan Colombia. Pero tampoco es posible sin tomar en cuenta la orientación interna de la burguesía colombiana, que logra sacar provecho de sus ventajas comparativas, a saber, por una parte sus vínculos con los negocios ilícitos, y por la otra la

posición geopolítica excepcional de su territorio al servicio de la prevalencia hegemónica imperialista.

Las vertientes populares y democráticas de la sociedad civil en América Latina y el Caribe deben identificarse e identificar sus intereses comunes para coadyuvar a una solución frente a una situación que amenaza la estabilidad, la coexistencia, la cooperación y la potenciación de su integración regional autónoma en una situación de crisis. Los cambios -muy importantes- en curso, que apuntan a resolver antiguos y nuevos desequilibrios sociales a cargo de reagrupamientos del centro-izquierda, requieren contrarrestar la ofensiva neocolonial del ALCA, los acuerdos de libre comercio y las políticas neoliberales concebidas como fatalidades ineludibles. Movimientos sociales, fuerzas políticas, religiosas, culturales, de género y etnosociales y parlamentos y gobiernos, pueden contribuir a lograr que la solución política negociada del conflicto interno en Colombia se procese en soberanía y total autodeterminación del pueblo y la nación colombianos.

La unidad de acción más amplia es urgente para contener el neointervencionismo. Significa fortalecer los lazos bilaterales, desde la economía hasta la cultura; significa acortar distancias para una mayor integración en lugar de una espacialidad de aglomeración; significa fortalecer los acuerdos subregionales, MERCOSUR y CAN, acercarlos, evitar que los acuerdos de libre comercio terminen fragmentando aún más a América Latina y el Caribe.

Los gobiernos amigos pueden cumplir un papel eficaz en torno a una causa común: hacer viables la solución política negociada en Colombia y la no intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe para garantizar la verdadera seguridad regional, para consolidar la autonomía como fortaleza colectiva, para ponerle punto final a la pretensión intervencionista del imperialismo. Esta es la vía más corta para impedir que se agrave la amenaza en el continente. Ni el conflicto colombiano es tan rebelde a una salida política ni Estados Unidos es tan omnipotente como para imponer una voluntad unilateral sin consenso.

La lucha social se profundiza y extiende, en oleadas explosivas, sobre el eje andino. Con excepción del colombiano, todos los estados del área han visto acontecer sustituciones de gobierno por vías de hecho, desde la movilización y la protesta populares. En Colombia, contrario a lo que se cree, la aparente estabilidad es resultado de la fuerza militar, policial y paramilitar desplegada con el pretexto de la contención antiguerrilla. La presencia militar directa de Estados Unidos es posible también por eso. Ese equilibrio bajo la represión no es repetible en otros países del área; por eso Estados Unidos se cuida de no intervenir, sobre todo en estos momentos de auge popular. No lo ha hecho ahora en Bolivia, país que ocupa el tercer lugar en la ayuda militar de la Iniciativa Regional Andina (IRA).

La segunda versión del Plan Colombia empieza a tropezar con sus límites, tal vez es hora de actuar para neutralizarlo.

Bibliografía

- Bédar, Saida 2003 "Le Déploiement Stratégique de la Puissance Américaine", en *Diplomatie* (Paris) marzo-abril.
- Caycedo, Jaime 1998 "El Estado del Conflicto Social y Político Armado, y su Solución Negociada" mimeo.
- Caycedo, Jaime 2003[a] "Colombia en la Región Andina: Geopolítica de la Crisis", en Estrada Álvarez, Jairo (compilador) *Marx Vive III. Dominación, Crisis y Resistencias en el Nuevo Orden Capitalista* (Bogotá: Universidad Nacional, Unibiblos).
- Caycedo, Jaime 2003[b] "Economicismo y Guerras Periféricas", en Estrada Álvarez, Jairo (compilador) *Marx Vive II. Sujetos Políticos y Alternativas en el Actual Capitalismo* (Bogotá: Universidad Nacional, Unibiblos).
- Collier, Paul 2001 "Causas Económicas de las Guerras Civiles y sus Implicaciones para el Diseño de Políticas", en *El Malpensante* (Bogotá), N° 30, mayo-junio.

Corporación Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo 2003 *Plan Colombia-no*, (Bogotá: Rodríguez Quito Editores).

International Crisis Group 2003 *Colombia y sus Vecinos: los Tentáculos de la Inestabilidad*, Informe sobre América Latina (Bogotá/Bruselas), N° 3.

Malamud, Carlos 2003 "Colombia, Brasil y las Naciones Unidas: ¿La Mediación es el Camino para la Paz?", en *Análisis del Real Instituto* (Real Instituto Elcano). En Internet ver <<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/>>

Rangel, Alfredo 2001 *Guerra Insurgente* (Bogotá: Intermedio).

Salgado Tamayo, Manuel 2002 *Drogas, Terrorismo e Insurgencia. Del Plan Colombia a la Cruzada Libertad Duradera* (Quito: la Tierra).

Soppelsa, Jacques 2003 "Constance de la Doctrine Monroe en Amérique du Sud", en *Revue Française de Géopolitique*, Dossier Géopolitique des États-Unis, Culture, Intérêts, Stratégies (Paris: Ellipses).

Vásquez, Álvaro 2003 "Solución Militar y Globalización", en Estrada Álvarez, Jairo (compilador) *Marx Vive III. Dominación, Crisis y Resistencias en el Nuevo Orden Capitalista* (Bogotá: Universidad Nacional, Unibiblos).

Notas

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Secretario General del Partido Comunista Colombiano.

1 Desde el punto de vista de los teóricos del Banco Mundial (BM) existe una estrecha relación entre las resistencias antisistémicas con forma de guerra civil y el llamado "crimen organizado" (Caycedo, 2003[a]. Una mayor ayuda de mejor calidad, el control sobre los recursos naturales y una intervención militar suficientemente prolongada y de costos compartidos debe presidir la estrategia del BM en el tratamiento del llamado "posconflicto" (Collier, 2001).

2 El Putumayo, tributario del Amazonas, es navegable casi hasta el pie de monte. Desde el Atlántico se puede llegar hasta los Andes y conectarse por carretera con el Pacífico. Es zona petrolera, del lado ecuatoriano y del lado colombiano. Un oleoducto transandino bombea petróleo hasta el puerto de Tumaco.

3 En 2001 la operación "Gato Negro", con participación de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Colombiano (Fudra) y del Comando Sur, atacó la denominada conexión brasileña al detener a Fernandinho Beira Silva, un narcotraficante de segundo orden en Brasil, y mostrarlo como una figura relevante por su presunta relación con las FARC.

4 Las maniobras Águila III, previstas para esta área, fueron suspendidas en vísperas de iniciarse por presiones sociales surgidas de la denuncia.